



Declaración de la CLATE ante la Cumbre del G20 Río de Janeiro – Noviembre 2024

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales saluda y acompaña a las organizaciones sociales y sindicales reunidas en Río de Janeiro, previo a las Cumbre de Líderes del G20, en el marco de la Cumbre de los Pueblos y de la Cumbre del G20 Social, para definir nuevas agendas y construir alternativas para el actual contexto mundial.

En ese sentido, saludamos la iniciativa de la presidencia brasileña del G20 de impulsar los debates y reflexiones del G20 Social en torno a los ejes de lucha contra el hambre y la pobreza, sostenibilidad y gobernanza global. Creemos que las y los trabajadores del Estado tenemos mucho para decir y aportar sobre estos temas.

En primer lugar, queremos poner en valor el rol del Estado, y de las políticas públicas que este lleva adelante, como herramienta central para cualquier transformación que se quiera implementar al interior de una nación, o de manera coordinada entre naciones. Es el Estado el único capaz de articular acciones en favor del interés público y en beneficio de la sociedad en su conjunto. Es la única entidad capaz de arbitrar en favor de los sectores más desfavorecidos y de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos y obligaciones que establecen las leyes.

Si queremos avanzar en erradicar el hambre y la pobreza necesitamos un Estado que tome acciones concretas para alcanzar la justicia social y la distribución de la riqueza. Necesitamos un Estado que tome medidas urgentes en pos de un desarrollo sostenible, que permitan avanzar en una transición justa para enfrentar el cambio climático. Y si queremos transformar la gobernanza global actual necesitamos Estados fuertes que se pongan de acuerdo entre sí y que celebren compromisos duraderos para avanzar hacia un horizonte de paz y prosperidad.

Parece obvio, pero es necesario decirlo: hace falta más Estado. Pero el tipo de Estado que necesitamos es distinto al que conocemos. Es necesario que el sector público estatal llegue a todas y todos los ciudadanos, que los haga parte de sus políticas y de los procesos de toma de decisiones.

Las políticas públicas se basan, ante todo, en la provisión de servicios que, como la educación, la salud, los servicios sociales, la seguridad, la justicia, los servicios de emergencia, entre otros, requieren trabajadoras y trabajadores que los lleven adelante. El Estado es trabajo intensivo. Por eso hablar de políticas públicas sin duda requerirá inversiones, pero ante todo necesitará trabajadoras y trabajadores estatales, servidoras y servidores públicos.

Es en ese punto donde las naciones que integran el G20 deben asumir un compromiso básico: el de reconocer a la negociación colectiva como el camino a seguir para construir la estructura estatal necesaria para llevar adelante sus políticas. Solo con trabajadores bien remunerados, calificados y con condiciones dignas de trabajo es posible que el sector público alcance los niveles de eficacia, de eficiencia y de compromiso con la ciudadanía que nuestras sociedades demandan. La negociación colectiva es la base para la democratización y la dignificación del empleo estatal.



En cuanto a la lucha por la sostenibilidad, esta exige que las naciones que integran el G20 asuman compromisos más contundentes ante el calentamiento global y el cambio climático. Aunque persistan los discursos negacionistas, los eventos climáticos extremos como las grandes sequías o las inundaciones a gran escala nos advierten que el modelo basado en quema de combustibles fósiles ha llegado a su fin.

Sin embargo, una transición energética justa que contemple un cambio de paradigma energético debe basarse en nuevos patrones de producción, circulación y consumo, donde el eje no sean los intereses corporativos sino las necesidades humanas. El planeta tiene límites y los estamos alcanzando.

En lo que respecta a la gobernanza mundial, las naciones del G20 deben enfrentar con urgencia al menos tres problemas centrales en la esfera internacional como son: el peso excesivo del endeudamiento externo de los países, el actual régimen de comercio e inversión a medida de las corporaciones transnacionales, y la ineficacia de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad para establecer acuerdos de paz e imponer el cese de conflictos armados.

El endeudamiento externo y las políticas de austeridad que el FMI impone a los países deudores crea barreras infranqueables para el desarrollo y obliga a los Estados a destinar la mayor parte de los presupuestos públicos al pago de deudas. La auditoría los procesos de endeudamiento y la condonación de deudas a los países pobres es el primer camino para abordar la solución de este problema. Asimismo, hay que abandonar los modelos de austeridad y enfrentar los problemas fiscales desde un criterio de justicia tributaria. Establecer impuestos a los superricos y gravar las rentas extraordinarias es un paso imprescindible para avanzar en una verdadera distribución de la riqueza.

En cuanto al sistema de comercio y de protección de inversiones, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), junto a los mecanismos de arbitraje que imponen, crean Estados impotentes y un sistema al servicio las ganancias de las corporaciones transnacionales. Esto es así porque involucran más que comercio, limitan las capacidades regulatorias de los Estados, interfieren con sus decisiones soberanas en materia de protección ambiental, laboral, alimentaria e incluso de inversión pública, cuando establecen, por ejemplo, la liberalización de compras públicas. Asimismo, los sistemas de arbitraje, como el CIADI, someten a los Estados a demandas multimillonarias de las corporaciones ante cualquier acción regulatoria que afecte sus ganancias reales o esperadas, aun cuando estas fueran tomadas para garantizar los derechos de la población o la protección del ambiente.

Por último, un ámbito multilateral como la ONU necesita redefinirse a la luz de su incapacidad para intervenir en conflictos armados y garantizar el alto fuego inmediato en casos de genocidio, como ocurre actualmente con el pueblo palestino. Necesitamos un orden multipolar, donde los ámbitos multilaterales no sean manipulados por un grupo pequeño de naciones. No pueden existir naciones, como los EE.UU., que se consideren con el derecho de aplicar sanciones, bloqueos y medidas coercitivas contra otros países, como desde hace más de seis décadas ocurre con Cuba y más recientemente con otros países.



Por todo ello esperamos que los líderes de las naciones del G20 tomen nota de estos problemas y estas demandas. Y mientras eso suceda, los movimientos de trabajadoras y trabajadores, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afroamericanas, ambientalistas, de mujeres y jóvenes, las diversidades y todos los colectivos sociales que luchamos por un mundo más justo no nos quedaremos de brazos cruzados. Debemos seguir construyendo en cada encuentro y en cada foro internacional articulaciones, redes, y vínculos para internacionalizar los conflictos y las resistencias. Y, sobre todo, tenemos que seguir alimentando la unidad que necesitamos para cambiar este mundo, por un mañana distinto, para nosotros y nosotras y para quienes vendrán después.